



Observatorio Local

IDEAS GLOBALES PARA EL GOBIERNO LOCAL

EJEMPLAR PROMOCIONAL



Observatorio Local. Ideas Globales para el Gobierno Local es una publicación especialmente dirigida al mundo local de Observatorio de las Ideas S.L.

COORDINADOR:

Juan Echaniz

Arquitecto, ha sido Coordinador General de la Diputación de Barcelona y Gerente Municipal de L'Hospitalet de Llobregat

EQUIPO DE COLABORADORES:

Josep Antoni Baguena

Benjamín Augusto López

Lluís Medir

Andreu Orte

Pablo Santcovsky

Esther Pano

Carles Rivera

Jordi Rosell

Ferran Vallespinós

EDITA

Observatorio de las Ideas S.L.

CONSEJERO DELEGADO

Daniel Fernández

PRESIDENTE DEL CONSEJO EDITORIAL

Isaías Táboas

CIF B65855868

Diagonal 519-521 2º 08029
Barcelona Tel. 93 494 97 20
www.observatoriodli.com
ISSN: 2339-9562
D. Legal B.10113-2014



Observatorio Local

IDEAS GLOBALES PARA EL GOBIERNO LOCAL

LAS CIUDADES SE TIENEN QUE IMPLICAR MÁS EN LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

ARTÍCULO ORIGINAL: «IPCC 5th Assessment Report “Climate Change 2014: Mitigation of climate Change”», Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

SÍNTESIS: Ferran Vallespinós, investigador científico del CSIC.

COMENTARIO: Ibon Galarraga, investigador y adjunto a Dirección; Elisa Sainz de Murieta, investigadora júnior. BC3, Basque Centre for Climate Change.

RESUMEN: Pese a los esfuerzos realizados, la emisión de gases de efecto invernadero ha sido, en la última década, la más elevada de la historia. Para evitar los impactos climáticos más peligrosos, es necesario el desarrollo de acciones de mitigación que rebajen en un alto porcentaje las emisiones de 2010. Este objetivo sólo es alcanzable con la aplicación urgente de un cambio institucional y tecnológico, que no está reñido, sin embargo, con el desarrollo económico.

¿SON LOS GRANDES EVENTOS DEPORTIVOS UNA OPORTUNIDAD O UN MAL NEGOCIO?

ARTÍCULO ORIGINAL: «Olympic Proportions: Cost and Cost Overrun at the Olympics, 1960-2012», Bent Flyvberg y Allison Stewart.

SÍNTESIS Y COMENTARIO: Francesc Trillas, profesor de Economía Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona.

RESUMEN: Todas las olimpiadas celebradas desde 1960 hasta 2012 han tenido unos costes que han superado sin excepción, y en ocasiones en mucho, a los previstos en el momento de aprobación de la candidatura. La guerra presupuestaria del propio proceso de selección y la presión pública para obtener una buena imagen disparan el presupuesto y ponen en duda la concepción extendida de estos eventos como magníficas inversiones económicas.

| OTRAS IDEAS DE INTERÉS |

EL AGUA EN ESPAÑA, ¿ES BARATA O CARA?

Josep Bagué Prats, Carmen Albiol Omella y Antoni Bru Angelats

EL URBANISMO MEJORA LA PERCEPCIÓN DE LA SALUD ENTRE LOS CIUDADANOS

Roshanak Mehdipanah, Maica Rodríguez-Sanz, Davide Malmusi, Carles Muntaner, Èlia Díez, Xavier Bartoll y Carme Borrell

SUBIR LA TARIFA DE APARCAMIENTO EN EL CENTRO DE LA CIUDAD NO IMPLICA, NECESARIAMENTE, UNA REDUCCIÓN DE VEHÍCULOS

Jelena Simicevic, Smiljan Vukanovic y Nada Milosavljevic

¿CUÁNTAS TIERRAS NECESITA LA TIERRA?

Global Footprint Network-WWF



Estimados lectores:

Durante 2014 se han publicado diversos estudios en relación con la evolución y las perspectivas del cambio climático. Sin duda, por sus características, el último informe del **Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático** (IPPC por sus siglas en inglés, organización intergubernamental promovida por el **Programa Ambiental de la ONU**) es muy relevante. Recoge la síntesis de los trabajos de evaluación de más de 800 científicos de todo el mundo. La publicación del quinto informe viene a confirmar la importancia de la emisión de gases de efecto invernadero en el cambio climático. Ya no existe ninguna duda de que la actividad humana causa un impacto en el comportamiento del clima que amenaza el futuro de la vida de las personas y el equilibrio de los ecosistemas. En este año el Comité Nacional para la Valoración del Clima y el Desarrollo (NCA-DAC por sus siglas en inglés) del Gobierno federal estadounidense ha presentado también la versión final de su evaluación del clima de 2014, que ha examinado el impacto del calentamiento global en EE UU y los progresos realizados en la lucha contra este fenómeno. De la importancia de estos informes da cuenta el hecho de que **Barak Obama** ha iniciado una campaña para concienciar a los norteamericanos sobre las consecuencias del calentamiento global en Estados Unidos. **Ibon Galarraga** y **Elisa Sainz de Murieta** exponen que existen tecnologías y políticas que permitirían estabilizar la temperatura media global en un umbral que la ciencia considera tolerable. Y también ponen de manifiesto el importante papel de las ciudades y de las aglomeraciones urbanas en la lucha contra el cambio climático. Son muchas las ciudades que están impulsando políticas específicas, pero el reto es que se doten de un planteamiento integral donde la sostenibilidad impregne la mayor parte de las políticas públicas. Desde la planificación urbana y territorial, los gestores locales deberían incorporar las previsiones de estos estudios. Sirva para ilustrar esta necesidad las conclusiones de otro estudio reciente, **Cambio climático en la costa** (**Instituto de Hidráulica Ambiental IH Cantabria**, www.ihcantabria.com), que concluye que, a finales de este siglo, incluso si se toman medidas relevantes, la subida del mar en las costas españolas será de entre 30 y 60 centímetros, y que podrían superarse estas cifras en caso de inacción. Todo un reto para las ciudades costeras y para el sector turístico, pero también para las infraestructuras localizadas en la costa. Igualmente, existe un amplio campo de acción en el diseño urbano y de las edificaciones para compensar la subida prevista de las temperaturas y sus consecuencias. Teniendo en cuenta que las previsiones de los organismos internacionales son que para 2030 el 60 % de la población mundial vivirá en ciudades y aglomeraciones urbanas (actualmente ya se rebasa el 50 %), las ciudades van a ser protagonistas de primer orden en la lucha contra el cambio climático. Los esfuerzos que muchas ciudades españolas están haciendo con sus modestas capacidades son muy importantes para la concienciación del problema en la sociedad.

Bent Flyvberg y **Allison Stewart** han investigado de modo sistemático los costes que para las ciudades ha supuesto la organización de unos juegos olímpicos, y llegan a la conclusión de que los sobrecostes sobre la inversión prevista han sido –en prácticamente todos los casos– muy importantes. Hay una creencia en la política local de que los grandes eventos (los diferentes juegos pero también las exposiciones universales y otros acontecimientos) sirven para relanzar ciudades en decadencia o sometidas a profundos cambios económicos. **Francesc Trillas**



nos hace ver en su análisis que la literatura e investigaciones académicas sobre el tema muestran que, desde el punto de vista financiero y económico, la decisión de una ciudad de organizar algunos de estos eventos no se justifica. Las ciudades que, a pesar de todo, opten por organizar grandes acontecimientos deberían hacer un planteamiento más transparente (explicar costes reales y beneficios esperados), monitorizar de manera profesional el seguimiento y el control de los costes y poner énfasis en los aspectos no directamente económicos, como pueden ser las mejoras en la valoración de la ciudad en el mercado en el que compita (regional, nacional o internacional), u otros de carácter social.

El **Estudio sobre el precio del agua en España**, coordinado por **Josep Bagué** y publicado por la **Fundació Aequae**, proporciona un poco de luz sobre los costes reales del ciclo integral del agua y concluye que queda mucho camino para que la factura refleje todos los costes. En líneas generales, ésta sólo recoge los gastos de explotación y no incluye otros significativos, como las inversiones o el mantenimiento. En realidad, además de no ajustarse a la Directiva Marco del Agua del Parlamento europeo y del Consejo, esta situación no ayuda a que el consumidor sepa con exactitud cuánto cuesta todo el ciclo que finalmente le proporciona agua. Entre otras consecuencias, se produce un funcionamiento poco eficiente de los servicios relacionados que deben estar pendientes de decisiones sobre inversiones de las Administraciones. Más allá de este planteamiento conceptual, el estudio compara el precio del agua con otros servicios (telefonía y electricidad) y con otros países europeos. En conjunto, se trata de un estudio riguroso que ayuda a afrontar con datos un debate sobre el precio del agua que está en la agenda social y política. La crisis ha hecho aflorar posiciones extremas en el debate del agua, sobre todo en cuanto al suministro doméstico se refiere. Como contrapunto está un planteamiento más sostenible, económica y ambientalmente, que tiende a la interiorización de todos los costes en la factura, abordando en paralelo, con otras políticas públicas necesarias, los problemas derivados de la llamada «pobreza energética» (imposibilidad de pago de los recibos de suministros básicos).

Un equipo de investigadores de la **Agència de Salut Pública de Barcelona (Roshanak Mehdi-panah, Maica Rodríguez-Sanz, Davide Malmusi, Carles Muntaner, Èlia Díez, Xavier Bartoll y Carme Borrell)** ha estudiado (Proyecto Sophie, financiado por la UE) cómo evoluciona la percepción de la salud en los barrios que se han sometido a políticas integrales de mejora urbana en comparación con otros barrios en los que no se ha actuado. Se trata de una investigación experimental en cuanto al método, pero los resultados dan claves a los gestores municipales para ahondar en un planteamiento de la mejora urbana interdisciplinar que no atienda sólo a los aspectos físicos (edificación, espacios públicos o equipamientos), sino que junto con estos aborde otras políticas que tengan que ver con lo social y lo económico.

A aquellos ayuntamientos que estén revisando sus políticas de movilidad les será de utilidad la investigación realizada por **Jelena Simicevic, Smiljan Vukanovic y Nada Milosavljevic** sobre el comportamiento de los usuarios en relación con el cambio de tarifas y la limitación de tiempo en las zonas reguladas en superficie (zona azul y otras). Una de las conclusiones es que las modificaciones al alza en la tarifa del aparcamiento regulado en superficie en el centro de la ciudad no evitan (al menos hasta un límite de tarifa que es diferente para cada ciudad) que los conductores no residentes continúen utilizándolo. La tarifa no es, por lo tanto, un factor determinante para

CARTA DEL COORDINADOR



que los ciudadanos decidan ir o no al centro en coche. En aquellas ciudades donde se pretenda sacar el coche privado del centro de la ciudad esta política no será suficiente. Las autoridades locales habrán de diseñar otras medidas más complejas y combinadas dentro de una política de movilidad integrada para conseguir este objetivo.

Global Footprint Network y **WWF** han presentado su informe **Planeta Vivo 2014**, en el que se profundiza en el concepto de «huella ecológica», que relaciona el consumo de la humanidad con la capacidad de regeneración de la Tierra. Ya estamos hipotecando el futuro si no cambiamos nuestros hábitos y maneras de consumir. Los gobiernos locales tienen la responsabilidad, desde sus capacidades, de avanzar hacia otro modelo energético que permita equilibrar de un modo sostenible la demanda de recursos con las capacidades de la Tierra. Más allá de la pedagogía, la divulgación y la formación, las ciudades están bien situadas para promover servicios públicos más renovables energéticamente y un uso del espacio urbano más eficiente, con políticas de movilidad que rebajen sustancialmente la emisión de gases y la contaminación, entre otras medidas.

Espero que todas estas ideas y comentarios sean de su interés.

Juan Echániz

LAS CIUDADES SE TIENEN QUE IMPLICAR MÁS EN LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

- **Publicación:** «IPCC 5th Assessment Report “Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change”», abril de 2014. Disponible en el siguiente enlace: <http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg3/>
- El **Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)** es una organización científica internacional, ratificada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, encargada de proporcionar información contrastada sobre los riesgos del cambio climático.
- **Síntesis: Ferran Vallespinós**, investigador científico del CSIC.
- **Comentario y análisis: Ibon Galarraga**, investigador y adjunto a Dirección y **Elisa Sainz de Murieta**, investigadora júnior. BC3, Basque Centre for Climate Change.

SÍNTESIS DE LA IDEA

Resumen: El quinto informe de IPPC afirma que se necesita un cambio urgente de paradigma institucional y tecnológico si quieren evitarse los efectos más peligrosos asociados al cambio climático.

El Grupo de Trabajo III del Quinto Informe de Valoración del IPCC ha presentado recientemente los resultados referentes a las medidas que deberían adoptarse para la mitigación de los efectos del cambio climático. El informe del IPCC señala que el comportamiento de las emisiones en la última década confirma el peor de los escenarios a pesar de algunos esfuerzos realizados. En la década 2001–2010, la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) ha sido la más elevada de la historia, y la velocidad de incremento ha triplicado a la de las tres décadas anteriores. Las principales fuentes emisoras residen en la generación energética y en la industria. Tan sólo 10 países totalizan el 70 % de la producción de GEI y se muestran importantes diferencias regionales: mientras la tasa de emisión se modera en los países de la OCDE, se incrementa significativamente en Asia y América Latina. Con estos datos, el informe contempla diferentes escenarios de concentración de CO₂ hasta 2100, con una probabilidad diferente, y que suponen incrementos de temperatura media entre 1,5 y 4 °C.

Existe un elevado acuerdo científico en que deben de desarrollarse acciones de mitigación y adaptación al cambio climático si quieren evitarse los impactos más peligrosos. Se plantea no superar un incremento térmico de 2 °C en relación con la situación preindustrial, lo que implica rebajar entre un 40 y un 70 % las emisiones de 2010. Este objetivo sólo puede lograrse con un gran cambio institucional (políticas nacionales y sectoriales, cooperación regional e internacional) y tecnológico. En el informe se plantean medidas concretas para cada sector: producción energética, transporte, edificación, industria, agricultura y usos de la tierra. Estas medidas han de aplicarse urgentemente (en el horizonte de 15 años), ya que se ha tardado mucho en actuar.

Se consideran también los costes económicos de la mitigación en diferentes escenarios y se comparan con los de la inacción. Se pone de manifiesto que claramente las políticas de lucha contra el cambio climático no son antagónicas con el desarrollo económico.

COMENTARIO Y ANÁLISIS

A medida que la población mundial se concentra en las ciudades, es cada vez más urgente y necesaria la aplicación por parte de los gobiernos locales de medidas para la reducción de gases de efecto invernadero y para la adaptación de las poblaciones a los efectos ya inevitables del cambio climático.

«Las ciudades juegan un papel fundamental en la lucha contra el cambio climático».

Las áreas urbanas concentran, a nivel global, más de la mitad de la población mundial, así como la mayoría de sus edificaciones y actividades económicas. Para finales de este siglo se espera que un 70 % de la población mundial viva en ellas. Las ciudades juegan, por tanto, un papel fundamental en la lucha contra el cambio climático.

Es notable el esfuerzo de numerosos ayuntamientos durante los últimos años en la elaboración de planes de eficiencia energética, de limitación de emisiones en el sector de los transportes o incluso de planes para adaptarse a los impactos del cambio climático. Sin embargo, el último informe del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático recoge claramente que estos y otros esfuerzos para aumentar el ahorro energético no han sido suficientes para compensar el incremento de consumo asociado al aumento de la población (IPCC, 2014), especialmente en relación al notable aumento del consumo *per capita* por unidad de Producto Interior Bruto (PIB). No obstante, existen combinaciones tecnológicas y de política que permitirían estabilizar la bajada de temperatura media global en 2 °C (umbral de peligrosidad establecido por la ciencia y adoptado en los acuerdos internacionales), y hacerlo además de una forma económicamente viable (González-Eguino y Arto, 2014).

Las áreas urbanas son una de las principales fuerzas del cambio global (Olazábal *et al.*, 2012). El IPCC destaca la importancia de las políticas de planificación urbana y dedica un capítulo completo a las edificaciones, cuyo consumo energético en 2010 alcanzó un 32 % del consumo global. Las ciudades son además motores económicos que generan alrededor del 80 % de la actividad mundial (New Climate Economy, 2014), y que han sido destacadas como una de las tres áreas claves de actuación para lograr el cambio estructural necesario (Stern, 2014).

Los gobiernos locales pueden (y deben) jugar un papel importante para avanzar hacia una sociedad baja en carbono. Esto exige una transformación profunda en las próximas décadas, entre 2015 y 2030 (González de Eguino y Arto, 2014), en dos aspectos principales:

«Los gobiernos locales pueden (y deben) jugar un papel importante para avanzar hacia una sociedad baja en carbono. Esto exige una transformación profunda en las próximas décadas, entre 2015 y 2030».

- En primer lugar, es necesario avanzar hacia sociedades menos consumidoras de recursos. Los gobiernos locales pueden apostar por tecnologías bajas en carbono frente a otras fuentes más contaminantes como el carbón. Esto, además, mejora la calidad del aire. También es posible actuar sobre la demanda mediante campañas que promuevan cambios de comportamiento o mediante el ahorro y eficiencia energéticos. El IPCC (2014) señala que de este modo pueden reducirse las emisiones en un 20 % a corto plazo y en un 50 % en 2050. Son también necesarias medidas como la promoción del transporte público, el cambio a sistemas con mayor eficiencia o la sustitución de los combustibles tradicionales por otros con menores emisiones.

- En segundo lugar, se debe incidir en la planificación urbana. Considerar criterios como las emisiones, la conectividad y accesibilidad o el consumo de recursos (actual y futuro) es clave para diseñar una ciudad baja en carbono. Como

«No debemos olvidar que, aunque logremos el objetivo de estabilización de los 2 °C, el planeta sufrirá determinados impactos por la propia inercia del sistema climático. (...) Los gobiernos locales son clave también en lo referente a la adaptación al cambio climático».

ejemplo comparamos dos aglomeraciones urbanas, Atlanta y Barcelona, de similar población pero de muy diferente huella de carbono. Atlanta (5,25 millones de hab.) tiene unas emisiones (toneladas de CO₂ por persona) de 7,5, mientras que Barcelona (5,33 millones de hab.) tiene 0,7. Esto es debido a la diferente forma de ocupar el territorio y a los hábitos de consumo y de vida distintos (Fuente: *Better Growth, Better Climate: The New Climate Economy Report*, Chapter 2, Cities).

Además, no debemos olvidar que, aunque logremos el objetivo de estabilización de los 2 °C, el planeta sufrirá determinados impactos por la propia inercia del sistema climático (Parry *et al.*, 1998). Por ejemplo, en la actualidad se ha registrado un ascenso del nivel del mar a un velocidad global media de 3 mm/año. Aunque las emisiones se redujeran de forma drástica, este ascenso seguiría ocurriendo durante bastantes años. Los gobiernos locales son clave también en lo referente a la adaptación al cambio climático.

Los impactos serán muy diversos en función de la localización geográfica, el tamaño de los municipios, su capacidad económica, etc. Y los efectos no se repartirán de forma uniforme: algunas zonas serán más vulnerables. Por consiguiente, resulta aconsejable analizar la vulnerabilidad de los municipios, identificando las necesidades prioritarias y definiendo planes de actuación. Los países mediterráneos, por ejemplo, son especialmente sensibles al aumento de temperatura y a los cambios en los patrones de lluvia, con un incremento significativo de los periodos de sequía. En las ciudades, este aumento de temperatura se ve amplificado por el «efecto isla de calor», un sobrecalentamiento debido a la escasez de vegetación, la evapotranspiración y la absorción de calor por parte de los materiales urbanos como el asfalto y el cemento. Para paliar estos impactos, los municipios pueden desarrollar medidas como aumentar las zonas verdes, crear corredores de viento y zonas húmedas e incluso la implantación de tejados verdes con vegetación, que retienen humedad, reducen la escorrentía superficial y son excelentes aislantes térmicos.

El objetivo de este comentario ha sido subrayar el gran potencial de actuación de los gobiernos locales en relación con las políticas de cambio climático (adaptación y mitigación).

Aún estamos a tiempo de frenar este proceso, pero el tiempo se acaba. Dos son las condiciones que deben darse: en primer lugar, los cambios han de ser profundos y los criterios de sostenibilidad han de integrarse de forma transversal en todas las políticas locales; en segundo lugar, debemos actuar con rapidez –en las próximas dos décadas– si queremos evitar impactos que cambiarán radicalmente nuestra forma de vida y la de nuestros hijos e hijas.

REFERENCIAS

González-Eguino, M. y Arto I. (2014). «Warning to navigators: IPCC report on climate change mitigation», *BC3 Policy Briefings*, PB2014(Special Issue 2). Disponible en: <http://www.bc3research.org/policybriefings/2014-SpecialIssue-02>

IPCC (2014). *Fifth Assessment Report (AR5)*. Disponible en: <http://www.ipcc.ch/report/ar5/index.shtml>

New Climate Economy (2014). *Better Growth, Better Climate*. Synthesis Report. Washington D.C.



Olazábal, M., Chelleri, L., Waters, J. J. y Kunath, A. (2012). *Urban resilience: towards an integrated approach*. Presented at the First International Conference on Urban Sustainability & Resilience. Londres.

Parry, M., Arnell, N., Hulme, M., Nicholls, R. y Livermore, M. (1988). «Adapting to the inevitable», *Nature*, 1988(395), 741.

Stern, N. (2014). «The State of Climate Change – and what we might do about it». TED talks. 2014. Disponible en: <http://www.youtube.com/watch?v=UIoGt7ZO0sE>

¿SON LOS GRANDES EVENTOS DEPORTIVOS UNA OPORTUNIDAD O UN MAL NEGOCIO?

- **Publicación:** «Olympic Proportions: Cost and Cost Overrun at the Olympics, 1960-2012», junio de 2012, *Saïd Business School Working Papers*, Oxford (Universidad de Oxford). Disponible en el siguiente enlace: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2238053
- **Bent Flyvbjerg** es profesor de Gestión de Grandes Programas en la Saïd Business School de la Universidad of Oxford y **Allison Stewart** es directora de Estrategia y Excelencia Funcional para Proyectos de Capital en el BG Group.
- **Comentario y análisis:** **Francesc Trillas**, profesor de Economía Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona.

SÍNTESIS DE LA IDEA

Resumen: La organización de unos juegos olímpicos supone para las ciudades candidatas un dispendio económico muy elevado, que en todos los casos estudiados ha sobrepasado con creces, en menor o mayor medida, el presupuesto previsto.

El trabajo de Flyvbjerg y Stewart describe la presencia de escaladas de costes en los juegos olímpicos de invierno y verano desde 1960, hasta los últimos Juegos de Londres de 2012. En todas las olimpiadas que han tenido lugar en este periodo, los costes finales del proyecto (si nos fijamos únicamente en el coste de las instalaciones y en el coste operativo del evento) han superado a los previstos en el momento de aprobación de la candidatura, y en muchas ocasiones por una cantidad astronómica. En términos reales, el sobrecoste en promedio es del 179 %. Esto convierte la decisión de organizar eventos de este tipo en una de las decisiones financieramente más arriesgadas que un gobierno local puede tomar.

A pesar de que en las últimas ediciones el Comité Olímpico Internacional había introducido algunas medidas para limitar los sobrecostes, estos han terminado produciéndose de todos modos. Los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992, pese a ser un éxito organizativo y popular, no fueron ajenos a esta tendencia. En realidad, el nivel de sobrecostes en Barcelona fue el segundo de toda la serie analizada en el trabajo, sólo por detrás de los de Montreal en 1976. El menor nivel de sobrecostes tuvo lugar en los juegos de Pekín en 2008, y los sobrecostes han sido en general más elevados en los juegos de verano que en los de invierno.

Este trabajo forma parte de una extensa rama de investigación en economía aplicada que viene cuestionando las virtudes de los grandes eventos deportivos como inversión económica. La mayoría de expertos considera hoy que estos acontecimientos deben concebirse como grandes operaciones festivas (de naturaleza más consumista que inversora) de un coste elevado.

Es preciso tener en cuenta también, para comprender el tipo de relaciones entre las entidades organizadoras y las ciudades sede o candidatas, que el proceso de selección lo efectúa una organización no lucrativa de carácter monopolístico (en este caso el COI). Este monopolio es estable porque lo que los espectadores desean es proclamar la mejor competición del mundo. No sería la mejor del mundo si hubiera otro torneo competidor.

La ciudad organizadora se convierte en rehén de este monopolio y adquiere un compromiso internacional del que no puede escapar.

Los sobrecostes en un gran acontecimiento deportivo son frecuentes porque, por una parte, la excepcionalidad de las edificaciones hace muy difícil anticipar posibles sobrepuestos. Por otra parte, el ciclo temporal de organizar la candidatura y la celebración de unos juegos facilita los sobrecostes, al incentivar una escalada progresiva de compromisos, ya que una vez decidida una candidatura y, en especial, decidida la sede, sencillamente nadie contempla echarse para atrás. Las excepciones en este sentido son mínimas, y ninguna ha tenido lugar en los últimos tiempos para unas olimpiadas. Los mundiales de fútbol de 1962 y 1986 se organizaron respectivamente en Chile y en México tras la retirada de los países organizadores. En cuanto a candidaturas a juegos olímpicos, a finales de 2012 Roma anunció que se retiraba de la puja por organizar los juegos de 2020, tras anunciar el Gobierno tecnocrático presidido por Mario Monti que, como consecuencia de su situación de crisis económico-financiera, el país no podía hacer frente a los costes derivados de una olimpiada.

El ciclo temporal de unos juegos se inicia con la aprobación por parte de un ayuntamiento o Gobierno de la candidatura, con un presupuesto inicial. Una vez la candidatura es oficial, la ciudad compite con otras, por lo que puede estar tentada a aumentar el presupuesto para ser más elegible. En la práctica, cada ciudad candidata entra en una guerra presupuestaria con las demás, en un «juego» con una estructura lógica parecida a una carrera de armamentos. Sin embargo, el trabajo analizado calcula los sobrecostes después de haber tenido lugar ya esta escalada, con lo que el aumento de costes entre el momento en que empieza a concebirse el proyecto y la celebración final es mucho mayor. Cada ciudad acaba gastando más de lo esperado, aunque obtiene al final una probabilidad de ganar la candidatura parecida a la que tenía al principio. Una vez se la elige, no hay marcha atrás y la presión pública va por completo en la dirección de gastar dinero para garantizar que los juegos van a dar una imagen positiva. Los organizadores son rehenes de las entidades organizadoras, los operadores de televisión, los arquitectos, los profesionales y la industria del deporte.

Los sobrecostes no son en esencia distintos de los que se producen en otros grandes proyectos de infraestructuras singulares como aeropuertos, trenes de alta velocidad, autopistas, puentes o túneles. Sin embargo, en el caso de los juegos olímpicos, los sobrecostes se producen el cien por cien de las veces. No hay excepciones, mientras que en otros terrenos, ocasionalmente, algún proyecto se construye con el coste previsto.

COMENTARIO Y ANÁLISIS

Las investigaciones sobre el rendimiento social de los grandes acontecimientos deportivos demuestran que sus beneficios se exageran y sus costes se minusvaloran sistemáticamente.

Por lo tanto, es imprescindible que, antes de organizar cualquier evento de este tipo, se realicen análisis rigurosos de los costes reales que tales empresas tienen para los habitantes de las ciudades organizadoras.

«La conclusión principal de toda esta literatura es que los beneficios sociales de los grandes acontecimientos deportivos como los juegos olímpicos suelen exagerarse y que, por el contrario, los costes sociales infravalorarse».

«Desde el punto de vista económico, todos estos acontecimientos deberían catalogarse más como fiestas o actos de consumo que como inversiones. Y dada la tendencia a los sobrecostes, los comités organizadores deberían desarrollar medidas para minimizar la tendencia a exceder el coste inicial». «La polarización política afecta negativamente al comportamiento económico. Un aumento del IPP como el observado entre 2007 y 2012 reduce la producción, el empleo y la inversión».

Con posterioridad a los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992 han aparecido numerosos estudios de investigación económica aplicada, de carácter académico, a cargo de expertos del más alto nivel, que cuestionan la existencia de beneficios sociales netos una vez descontados los costes derivados de los grandes acontecimientos deportivos.

A esta literatura emergente la han acompañado varios trabajos más informales, de periodistas o medios de comunicación internacionales de prestigio. Entre estos trabajos cabe destacar los siguientes:

- Una serie de artículos del periodista Simon Kuper, del *Financial Times*, en los que hace patente su escepticismo acerca de los beneficios netos de Sudáfrica por ser el anfitrión del Mundial de Fútbol de 2010 y de Brasil por ser el del Mundial de Fútbol de 2014.
- El capítulo de *Soccernomics* –el famoso libro escrito por el propio Kuper en colaboración con el economista Stefan Szymanski– dedicado a presentar las principales conclusiones de la literatura académica sobre la evaluación social de los grandes acontecimientos deportivos.
- La publicación reciente de un Handbook Internacional que presenta algunos de los principales argumentos de esta línea de investigación.
- Varios artículos en la revista británica *The Economist*. Por ejemplo, en mayo de 2004 se publicó allí un artículo sobre la candidatura londinense a los Juegos Olímpicos de 2012, cuyo título era: «Do London a favour: give the Olympics to Paris» («Háganle un favor a Londres: den los juegos a París»).

La conclusión principal de toda esta literatura es que los beneficios sociales de los grandes acontecimientos deportivos como los juegos olímpicos suelen exagerarse y que, por el contrario, los costes sociales, infravalorarse.

En España prevalece la idea de que este tipo de eventos reporta grandes beneficios económicos a raíz sin duda del gran éxito de los Juegos de Barcelona, que facilitaron la transformación urbanística de la ciudad y su conversión en gran potencia turística. Los Juegos de Barcelona fueron, en efecto, excepcionales, comparados con la mayoría de grandes eventos deportivos, pero existen motivos para pensar que, al igual que en otros acontecimientos de este tipo, se han infravalorado los costes y se han exagerado los beneficios; o se han computado beneficios que podían haberse obtenido sin tener que incurrir en los costes asociados a unos juegos. Otros proyectos que se plantean animados por este precedente exitoso, pero único, deberían tener esta reflexión en cuenta.

La misma lógica de tendencia a los sobrecostes afecta a otros posibles grandes eventos deportivos como las etapas de vueltas ciclistas, los Juegos del Mediterráneo, las finales de grandes torneos, etc. Desde el punto de vista económico, todos estos acontecimientos deberían catalogarse más como fiestas o actos de consu-



mo que como inversiones. Y dada la tendencia a los sobrecostes, los comités organizadores deberían desarrollar medidas para minimizar la tendencia a exceder el coste inicial.

Por lo demás, los argumentos que apoyan el punto de vista de que ser sede de grandes sucesos deportivos produce aumentos importantes en la actividad económica se apoyan en fundamentos débiles, según las investigaciones académicas de más alto nivel de las últimas dos décadas. Si una ciudad o un territorio necesitan una mejora de las infraestructuras para mejorar su calidad de vida cotidiana y para su desarrollo económico, ese tipo de intervención pública debería decidirse comparando sus costes y beneficios con otras inversiones hechas para la consecución de los mismos objetivos. En los años dedicados a perseguir el sueño de un gran acontecimiento deportivo, la intervención pública queda radicalmente orientada hacia costosas intervenciones relacionadas con el evento, que además están sujetas a la lógica de la «escalada de compromisos» y de la «carrera de armamento», es decir, se someten a fuertes presiones al alza, en detrimento de otras inversiones en capital humano o de otros gastos sociales menos visibles, pero quizá más imperiosos para el bienestar social a medio y largo plazo. Si la infraestructura es muy necesaria, en general no hacen falta unos juegos olímpicos para construirla.

«Un completo análisis ex ante del coste y del beneficio social, de carácter independiente y profesional, realizado por expertos internacionales, puede ayudar a tomar decisiones informadas al respecto. Aunque el proyecto se acabe llevando a cabo (...), la ciudadanía y los responsables políticos tienen derecho a conocer los auténticos costes que son esperables desde el punto de vista económico».

Un problema asociado al de los déficits infraestructurales es la posible existencia, sobre todo en países en vías de desarrollo, de una tensión entre déficits infraestructurales y la capacidad organizativa que exigen unos juegos. Es decir, países con más necesidades de infraestructura pueden ser los que tengan menos capacidad para organizar un evento de esta naturaleza. Sin embargo, los sobrecostes de los que hablan los autores del trabajo analizado se producen también en países desarrollados, como ilustran los casos de Montreal y Londres.

Otros grandes acontecimientos (como unos eventuales juegos olímpicos de invierno para Barcelona o unos de verano para Madrid), que no disfrutarán de las circunstancias excepcionales que rodearon a Barcelona 92, deberían replantearse, a la luz de esta experiencia y de la literatura reciente sobre la valoración social de grandes eventos deportivos. Un completo análisis *ex ante* del coste y del beneficio social, de carácter independiente y profesional, realizado por expertos internacionales, puede ayudar a tomar decisiones informadas al respecto. Aunque el proyecto se acabe llevando a cabo, porque democráticamente se decide que se desea con fervor organizar una fiesta olímpica o deportiva, la ciudadanía y los responsables políticos tienen derecho a conocer los auténticos costes que son esperables desde el punto de vista económico.

Sigue existiendo el mito de que organizar grandes eventos en España, sobre todo deportivos, es algo deseable *per se*, como si cualquiera de estos acontecimientos pudiera replicar el éxito de Barcelona 92, sin entenderse que éste estuvo rodeado de una gran excepcionalidad (y aun así sus costes han sido infravalorados y sus beneficios exagerados).

EL AGUA EN ESPAÑA, ¿ES BARATA O CARA?

- **Publicación:** «Estudio sobre el precio del agua en España», *Aquae Papers*, n.º 1 (junio 2013). Disponible en el siguiente enlace: <http://www.fundacionaquae.org/sites/default/files/HJAC935507.pdf>
- **Fundació Aquae.** Coordinador: **Josep Bagué Prats**, Secretario General y Director económico-financiero de Agbar. Autores: **Carmen Albiol Omella** es jefa de Planificación Comercial de Agbar y **Antoni Bru Angelats** es director fiscal de Agbar.
- **Síntesis:** **Luis Martín Martínez**, director de H₂O Hidrología Sostenible.

SÍNTESIS DE LA IDEA

Resumen: El precio del agua en España está muy por debajo del de la media de países europeos de su entorno y del de otros servicios como la electricidad y la telefonía, por lo que resulta patente la posibilidad y necesidad de absorber los costes reales del suministro de agua.

Este estudio analiza los costes reales asociados al ciclo integral del agua, que en la mayoría de ocasiones sólo cubren los gastos de explotación y deja de lado los costes de mantenimiento de infraestructuras e inversiones, lo que da como resultado que en España exista un precio ficticio, que contraviene el «principio de recuperación de costes» de la Directiva Marco del Agua europea. Este desfase causa situaciones de deuda que tienen que absorber las Administraciones, ya de por sí en mala situación económica como consecuencia de la crisis actual.

En la investigación se examinan los distintos conceptos por los que se factura el consumo doméstico y el peso de dichos conceptos en diferentes ciudades españolas, resaltando las diferencias entre cada caso particular. La población, en general, desconoce este hecho, lo que puede generar la percepción de que el agua es barata.

Para conocer la realidad de las tarifas se comparan los precios del agua en España con los existentes en otros países europeos, tanto en valores absolutos como relativos a la renta, cosa que pone de manifiesto que el precio del agua en España es muy inferior a la media europea, y que está más relacionado con aspectos culturales que con los recursos hídricos existentes en cada país.

También se ponen en relación las facturas del agua en los hogares españoles con los consumos de otras *utilities* como la telefonía y la electricidad. De ello se concluye que el gasto en agua es muy inferior al destinado a los otros dos servicios, pues supone solo un 0,71 % del gasto de una familia.

El estudio termina analizando la distribución de los diferentes actores en la facturación de los servicios de aguas (Administraciones estatales, autonómicas, locales y el sector privado), para concluir defendiendo la necesidad, tanto desde el punto de vista operacional como desde el legal, de un aumento de las tarifas del agua en España, con el argumento de que el análisis de costes con respecto a otros gastos familiares hace viable esta subida, si bien aspectos como la educación y concienciación son esenciales para su posible implantación en un país como España.

EL URBANISMO MEJORA LA PERCEPCIÓN DE LA SALUD ENTRE LOS CIUDADANOS

- **Publicación:** «The effects of an urban renewal project on health and health inequalities: a quasi-experimental study in Barcelona», *Journal of Epidemiology & Community Health*, vol. 68 (2014), pp. 811-817.
- **Roshanak Mehdipanah, Maica Rodríguez-Sanz, Davide Malmusi, Carles Muntaner, Èlia Díez, Xavier Bartoll y Carme Borrell** son investigadores de la Agència de Salut Pública de Barcelona.
- **Síntesis: Lluís Medir Tejado**, investigador posdoctoral en Ciencia Política en la Universidad de Barcelona

SÍNTESIS DE LA IDEA

Resumen: Este pionero artículo establece por vez primera una relación entre la mejora urbana y la mejora de la percepción de la propia salud de las personas. A partir de un trabajo empírico de diseño casi experimental, los autores demuestran que es posible observar mejoras de la percepción de la propia salud entre los habitantes de aquellos barrios o zonas «tratados» por las actuaciones integrales del Programa Barris establecido por la Llei de Barris catalana, frente a los que no, así como una disminución de la brecha de salud entre clases sociales.

En la pasada década, el Programa Barris del Gobierno de la Generalitat de Catalunya financió municipios que presentaron proyectos de renovación urbana integral en barrios desfavorecidos (mejoras físicas, sociales y económicas de los distintos espacios habitacionales). El objetivo de la investigación es evaluar los efectos de esta ley sobre las desigualdades percibidas en la propia salud de los residentes en los barrios intervenidos en la ciudad de Barcelona. El estudio, además, incorpora la variable «desigualdad» en la percepción de la salud en función de la clase social del individuo entrevistado, en este caso medida como «trabajadores manuales» frente a «trabajadores no manuales» (siguiendo la clasificación establecida en la clasificación nacional de ocupaciones).

Uno de los atractivos principales del artículo es que el trabajo empírico que lo fundamenta se basa en un diseño cuasiexperimental: se comparan adultos residentes en los cinco barrios en los que se intervino en Barcelona de 2004 a 2011 (Roquetes, Santa Caterina, Poble Sec, Ciutat Meridiana y Trinitat Vella), con los de ocho barrios con características socioeconómicas similares donde no intervino el programa. El artículo utiliza la Encuesta de Salud de Barcelona para medir la autopercepción de la salud de los entrevistados en dos momentos previos a la intervención (2001 y 2006) y en uno posterior a la misma (2011), y se limita a las respuestas de aquellos que aseguran haber vivido en el barrio durante más de 5 años, lo que garantiza de este modo su adecuación al estudio. Una vez determinados los grupos «pre» y «post», se utilizaron modelos de regresión de Poisson estratificados por sexo para calcular las razones de prevalencia, comparando 2011 con 2006 y 2001. Más tarde, se replicaron los análisis estratificados por clase social para estudiar la evolución de las desigualdades percibidas en salud en función de la pertenencia a una u otra clase social.

Los resultados muestran que, en los barrios en los que el programa se aplicó, los encuestados de ambos sexos disminuyeron de forma significativa la mala percepción de la salud, mientras que no se produjeron cambios significativos en el grupo de comparación. En el mismo análisis realizado



por clase social, la mejora significativa se observó en las clases más modestas: aumentó la autopercepción de la propia salud en el grupo de manual de los barrios intervenidos en ambos sexos, lo que resulta directamente en una disminución de las desigualdades en salud percibida. Resultados similares se observaron en relación con la percepción del estado de salud mental de las mujeres, mientras que, en los hombres, esta percepción empeora en ambos grupos de vecinos, pero sobre todo en el grupo de comparación.

Así pues, estas actuaciones integrales tuvieron un efecto positivo en la percepción de la salud de los ciudadanos y parecen haber conseguido promover mejoras, en especial en la autopercepción de la salud mental de ambos sexos y, sobre todo, entre las clases sociales más desfavorecidas, lo que favorece la disminución de la desigualdad en la salud.

SUBIR LA TARIFA DE APARCAMIENTO EN EL CENTRO DE LA CIUDAD NO IMPLICA, NECESARIAMENTE, UNA REDUCCIÓN DE VEHÍCULOS

- **Publicación:** «The effect of parking charges and time limit to car usage and parking behaviour», *Transport Policy*, n.º 30 (2013), pp. 125-131.
- **Jelena Simicevic, Smiljan Vukanovic y Nada Milosavljevic** son profesores de la Facultad de Transporte e Ingeniería del Tráfico de la Universidad de Belgrado.
- **Síntesis:** **Jordi Rosell**, profesor asociado de Política Económica en la Universidad de Barcelona.

SÍNTESIS DE LA IDEA

Resumen: La política de aparcamiento tiene un impacto en el sistema de movilidad de una ciudad. Mientras que una buena política de aparcamiento tiene efectos positivos, una mala política puede tener efectos contrarios.

El objetivo del estudio llevado a cabo en la ciudad de Belgrado pretende predecir el comportamiento de los usuarios de automóvil cuando se dan cambios en la tarifa y en la limitación de tiempo de estacionamiento. Para ello, se delimitó una zona de estudio en el centro de la ciudad con aparcamiento regulado (de pago) en superficie, así como también el estacionamiento subterráneo.

El primer resultado, esperado, es que un aumento de las tarifas en ambos tipos de aparcamiento implica una reducción de la demanda. Existe una tarifa de estacionamiento en zonas reguladas en superficie a partir de la cual la demanda empieza a disminuir, mientras que, con valores inferiores, ésta no disminuye. En el caso de Belgrado, es de 1,05 €/h, aunque, lógicamente, que sea una tarifa u otra depende de muchos factores en cada ciudad.

La disminución del tiempo máximo de estacionamiento en superficie implica un aumento de la demanda de aparcamiento subterráneo. Los visitantes del centro urbano por razones de trabajo son los más sensibles a un cambio de la política de aparcamiento, y es más probable que estos abandonen el aparcamiento en superficie, pues no pueden acortar su viaje. Se demuestra que este grupo es el más afectado por los cambios en esta política, lo cual es un resultado interesante, ya que este tipo de usuarios no son los más deseados en los centros de las ciudades, al contrario de los que utilizan el transporte privado por motivos de compra y ocio.

Otro resultado interesante es qué sucede cuando subimos sustancialmente tanto las tarifas del estacionamiento en la zona regulada en superficie como en los aparcamientos de los alrededores, y limitamos el tiempo de superficie a una hora. El número total de visitantes que deciden cambiar de destino es tan sólo de un 2 %, lo que significa que nuestra política de estacionamiento no pondrá en peligro significativamente el atractivo y eficiencia de nuestra zona, en especial si es el centro de la ciudad.

¿CUÁNTAS TIERRAS NECESITA LA TIERRA?

- **Publicación:** «¿Cuántas Chinas se necesitan para mantener a China?», Informe Planeta Vivo, 2014. Disponible en el siguiente enlace: http://awsassets.panda.org/downloads/ipv_resumen_2014__1.pdf
- **Global Footprint Network** es un comité de expertos independiente que desarrolla y promueve herramientas para el avance de la sostenibilidad. **WWF** es una organización que defiende la conservación, investigación y defensa del medio ambiente.
- **Síntesis:** Ferran Vallespinós, investigador científico del CSIC.

SÍNTESIS DE LA IDEA

Resumen: El concepto de «huella ecológica» sirve para estimar la capacidad de la Tierra para renovar los recursos renovables consumidos. Queda demostrada la tendencia de que, año tras año, se adelanta la fecha del consumo del «presupuesto» anual previsto. El informe bianual de la Global Footprint Network analiza la salud de la Tierra y el impacto de las actividades humanas, y es una herramienta magnífica para tomar conciencia sobre el consumo desmedido de recursos naturales.

La idea de «huella ecológica» es muy intuitiva: refleja las demandas humanas sobre la biosfera comparando el consumo de la humanidad con la capacidad regenerativa de la Tierra, o biocapacidad. Se hace calculando el área requerida para producir los recursos que consume la gente, el área ocupada por infraestructuras y el área de bosque que se necesita para secuestrar el CO₂ que no es absorbido por los océanos. La Global Footprint Network, organización mundial socia de WWF, elabora cada dos años el Informe Planeta Vivo, del que recientemente se ha hecho público el correspondiente a 2014. Entre otras conclusiones y datos interesantes destaca, por ejemplo, el hecho de que el día 19 de agosto se agotó el presupuesto ecológico del planeta, ya que en esa fecha se superó la capacidad de regeneración de los recursos consumidos. Según esta contabilidad, y de mantenerse esta tendencia, en 2050 harían falta tres planetas para suministrar los recursos exigidos por la humanidad para su sostenimiento (actualmente la cantidad de planetas requerida es de 1,5). Es interesante comprobar las diferencias entre países: China requeriría 2,2 Chinas. Por lo tanto, estamos instalados en un modelo insostenible que se agrava con el tiempo.

El Informe plantea diversas propuestas y advierte de la necesidad de actuar para revertir la situación. El cambio ha de basarse en la modificación de los hábitos de consumo y en un modelo energético basado en las energías renovables.

